



INSTITUTO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE BUENOS AIRES

“IV ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS”.

(2001)

SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL ESPACIO DEL MERCOSUR.
EL ESCENARIO ESTRATÉGICO DEL MERCOSUR.
HECHOS, DESAFIOS Y AMENAZAS.

Dr. Jorge Corrado

Siguiendo el pensamiento de Raymond Aron, tomado de Clausewitz, que dice *“la guerra es como el camaleón”*, afirmamos que la misma se encuentra en constante evolución y modificación. Mutando su naturaleza, contenidos, procedimientos y alcance. Y cuando creemos que se ha agotado en sus manifestaciones, se revela con mayor fuerza en otros aspectos, muchos más agresivos, morbosos e imprevistos.

Para efectuar un análisis estratégico del espacio geográfico que nos ocupa, abordaremos el tema haciendo algunas consideraciones preliminares:

+ a.- EL FIN DE LA GUERRA FRIA Y LA AUTODISOLUCION DE LA U.R.S.S.

La pregunta estratégica por definición no es aquella que se refiere al “qué hacer”, sino la que pregunta “de qué se trata”, cual es el eje del problema, lo medular, lo sustancial, lo conceptual.

Si no se tiene el concepto de lo que ocurre, no se puede operar sobre la realidad. La misma se torna caótica, ingobernable

Lo que es verdaderamente relevante, desde el punto de vista estratégico, es lo nuevo, no lo que se repite. El cambio y el conflicto derivado, no la continuidad y la estabilidad.

La novedad, en éste caso, fue la ausencia de la derrota militar clásica, en batalla.

HUBO UN COLAPSO ESTRATÉGICO, NO MILITAR, EN EL ÁMBITO DE UNA CONFRONTACIÓN MUNDIAL NUCLEAR: “LA GUERRA FRÍA”.

b.- DISMINUCIÓN DE LOS CONFLICTOS ENTRE ESTADOS Y AUMENTO E INTENSIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS INTRA ESTATALES.

En efecto, durante el primer decenio de esta "posguerra fría" se registraron 108 conflictos armados, en 73 lugares diferentes del planeta, cubriendo todas las gradaciones de intensidad:

- **menores**, en los cuales el número de bajas registradas durante su transcurso es superior a 25, pero menor a 1000;
- **intermedios**, con más de 1000 bajas durante su transcurso pero, en cualquiera de los años considerados, menos de esa cantidad y más de 25; y
- **mayores** (o literalmente **guerras** “de la primera especie”, con más de 1000 bajas fatales en cualquiera de sus años de desarrollo.

De los mencionados 108 conflictos, 92 de ellos fueron intraestatales, sin intervención de terceras partes externas; otros 9 fueron intraestatales, aunque con algún tipo de participación extranjera; finalmente, los 7 restantes fueron interestatales.

Es decir que el 93,5 % de los conflictos armados acontecidos en el mundo entre 1989 y 1998 (101 casos) fueron de naturaleza intraestatal. En términos absolutos, los años en los cuales se registró mayor cantidad de conflictos armados intraestatales fueron 1991 (50 casos sobre 51) y 1992 (54 casos sobre 55). Desde un punto de vista porcentual, la mayor participación de los conflictos intraestatales dentro del total de conflictos armados tuvo lugar en 1993 y 1994, con una tasa del 100 % .

c.- NUEVA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CRISIS Y EL CONFLICTO.

La guerra fría se caracterizó por la determinación y la identificación concreta de los adversarios en disputa. A través de la disuasión nuclear, se materializó la “*pax nuclear*”, los únicos 40 años de paz consecutivos en Europa, desde hace cinco siglos. Lo que hoy estamos viviendo como crisis, es la repentina irrupción de lo novedoso, que cambia los datos del problema y provoca como efecto la obsolescencia las categorías conocidas para resolver el conflicto. *Estos, en vez de constituir hechos excepcionales, tienden a transformarse en acontecimientos permanentes.*

El cambio tecnológico es la fuerza que impulsa el proceso de globalización de la economía mundial y en particular del sistema financiero, mientras desde el punto de vista político las culturas intentan su reafirmación, dentro de la integración o continentalismo.

Una de las características de la revolución tecnológica es el procesamiento de una masa de información que permite tomar decisiones estratégicas en tiempo real y a escala planetaria.

Ello ha cambiado el ritmo de los acontecimientos en las culturas desarrolladas.

Contrariamente, en las culturas subdesarrolladas han irrumpido las crisis generalizadas, abarcando a todos los sistemas institucionales: Políticos, Económicos o Sociales.

Surge la percepción de una extraordinaria *incertidumbre* en regiones deprimidas, ante los cambios cualitativos que no pueden ser incorporados. Las categorías del pensamiento, propio de épocas pasadas, no están en condiciones de *abarcar y conceptualizar* lo que está pasando hoy. La clave del presente, ante lo expuestos es:

Limitar la incertidumbre, reconociendo el carácter inexorable del avance tecnológico, y al mismo tiempo estar en condiciones de dar una respuesta, siempre tentativa, a la pregunta crucial: ¿qué tenemos frente a nuestros ojos?, ¿Porqué ocurre?, ¿Cuál es su concepto?.

Transformar esa incertidumbre en riesgo, a través del planeamiento. Acotar la irrupción de lo nuevo, sus condiciones y características: *sus esencias*. La tarea clave es ver lo que los ojos no ven. Así como es difícil escuchar, es mucho más difícil percibir y bucear en la dualidad. Abarcar y focalizar lo nuevo, para concentrar las energías.

Ante una situación de irrupción de lo nuevo, la tarea fundamental está en el campo de la Inteligencia Estratégica. Pero por encima de la Inteligencia Estratégica está la Sabiduría Política, que consiste en dirigir los esfuerzos institucionales según la naturaleza del conflicto que tenemos por delante.

Ante un conflicto nuevo, que emerge, la responsabilidad de la seguridad estratégica del Estado, consiste en nunca dar por seguro lo peor. Decía Churchill: “*Nunca lo peor es seguro*”. Pero, como complemento de esta afirmación, la responsabilidad político-estratégica – militar, consiste siempre en prever la peor hipótesis. Decía De Gaulle: “*El Ejército es una Institución que de nada sirve, salvo cuando todo depende de ella*”.

La confluencia entre el pensamiento estratégico y el político-diplomático, que nunca da por seguro lo peor, debe enfrentar hoy a los novísimos conflictos post- Guerra Fría. En éste mundo en constante cambio, de acelerado ritmo, las crisis constantes así lo exigen.

Hoy toda organización política estatal que no sea estructuralmente flexible y capaz de adaptarse dinámicamente al medio, a través del acceso directo e instantáneo a la información procesada, de alcance mundial, estará buscando inconscientemente su propia inmolación.

d. RIESGOS, AMENAZAS Y HECHOS ESTRATÉGICOS EN EL ESPACIO DEL MERCOSUR

A la Situación Estratégica Sudamericana la hemos caracterizado como grave. ¿Pero cuál es el sustento académico de ésta adjetivación? Si consideramos las expresiones del Director de la Agencia de Inteligencia para la Defensa de EEUU, las amenazas transnacionales clave son:

- ❖ La proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, misiles y otras tecnologías consideradas claves.
- ❖ El terrorismo internacional.
- ❖ El narcotráfico.

Sobre el carácter mundial del crimen organizado en América Latina, sus implicaciones, y las opciones para la política de Estados Unidos, trataré cuatro interrogantes:

✚ ¿Por qué el delito adquiere dimensiones mundiales, transnacionales?

✚ ¿Por qué América Latina? ¿Por qué algunos países latinoamericanos llegan a ser la sede o el objetivo de la actividad criminal transnacional (bien sea que faciliten las actividades o sean víctimas de ellas)?

✚ ¿Qué clase de actividad criminal transnacional podemos esperar que aumente en América Latina?

✚ ¿Qué pueden hacer Estados Unidos y América Latina respecto a tal actividad?

¿POR QUE EL DELITO ADQUIERE DIMENSIONES TRANSNACIONALES?

Vivimos en un mundo que experimenta tendencias crecientes hacia la liberalización de normas, fronteras abiertas y el movimiento intensificado de personas, dinero, bienes y servicios. En este mundo, en esta aldea mundial, la tecnología de alto nivel salva cada vez con mayor frecuencia las barreras tradicionales de tiempo, distancia y espacio. El otro lado menos deseable de este concepto de aldea mundial es un mundo que también se ha convertido en un océano mundial de amenazas. Esta internacionalización ayuda a que las organizaciones de tráfico de drogas y de otros tipos de amenazas que agreden a la cohesión interna de las sociedades y de los Estados tengan una mejor capacidad para operar, en un ámbito relativamente “descontrolado” y así acumular y legitimar enormes fortunas.

¿POR QUÉ AMÉRICA LATINA?

En primer término la ubicación relativa: la proximidad a Estados Unidos. No podemos omitir que en términos geográficos Estados Unidos tiene una frontera abierta en el sur. Algunos observadores comparan este fenómeno al vestíbulo de un hotel, del cual se puede entrar y salir. Desde la perspectiva de las amenazas transnacionales, América Latina es un mercado natural.


Este mismo fenómeno de fronteras abiertas contribuye al atractivo de Estados Unidos como mercado para exportar contrabando desde América Latina, principalmente para el



tráfico de drogas. El apetito estadounidense por las drogas ilícitas alimenta el crecimiento de poderosas organizaciones delictivas en el sur del continente.

Fuera de la proximidad geográfica, la exportación mutua y la concomitante importación de productos ilícitos, América Latina sigue siendo específico campo atractivo para la actividad criminal trasnacional por dos razones básicas: presenta riesgos mínimos y ofrece nuevas oportunidades para explotar.

Para operar eficazmente las organizaciones criminales trasnacionales necesitan países de base u origen, países escogidos como objetivos o víctimas y países mercados, los cuales pueden ser “de origen” u “objetivos”.

Examinemos algunas de las características que las organizaciones criminales trasnacionales buscan en los países escogidos como objetivos o de origen (países de base). ¿Qué tan generalizadas o autóctonas son tales características hoy, en el Hemisferio Sur?

 **Países de base:** ¿Cuántos países latinoamericanos tienen características atractivas como países “de base” para las empresas criminales trasnacionales?, ¿Cuántos países tienen pobreza, desbarajustes económicos que profundizan la brecha entre ricos y pobres y que, por consiguiente, ofrecen recursos humanos a las empresas criminales trasnacionales?, ¿Cuántos países tienen gobiernos frágiles y débiles, fronteras o costas descuidadas, instituciones judiciales frágiles, administraciones civiles insensibles, tradiciones que toleran (si no aprueban) la corrupción y administración de justicia poco dedicada o ineficaz?, ¿Cuántos países tienen economías en vías de desarrollo, con comercio y sistemas financieros en expansión, donde abundan las oportunidades para mezclar los negocios ilícitos con los lícitos?. Si una empresa criminal trasnacional estuviera buscando un país para su sede, ¿se establecería en Alemania (Bonn o Berlín), en México, en Colombia, o en el área de confluencia de las fronteras de Paraguay, Argentina y Brasil?.

 **Países escogidos como objetivos o víctimas:** Muchas de las cualidades que hacen atractivo a un país como “base” para la actividad criminal trasnacional, se encuentran también en los países escogidos como “objetivos” o “víctimas”. Sin embargo, en el caso del país víctima, es decisivo que se trate de un país en vías de desarrollo. En él sus Instituciones Políticas carecen de fortaleza y son corruptibles al extremo, por carencia de un desarrollo cultural y político  adecuado.

Surge una evidencia: la ocasión es oportuna, las condiciones están presentes y el escenario está dispuesto para una explosión de la actividad criminal trasnacional en América Latina.

¿QUE TIPO DE ACTIVIDAD CRIMINAL TRASNACIONAL PODEMOS ESPERAR QUE AUMENTE EN AMERICA LATINA?

Bien, explorando el futuro, ¿qué tipo de actividad criminal transnacional podemos esperar que aumente en América Latina en la próxima década? En mi opinión ya estamos experimentando aumentos espectaculares por lo menos en una docena de actividades delincuenciales.

✚ **Penetración del sistema político:** Financiar campañas políticas por parte de organizaciones criminales, con fuertes recursos económicos, especialmente provenientes del narcotráfico. Si la organización puede penetrar con dinero los altos niveles, la protección está prácticamente asegurada.

✚ **Destruir los Sistemas de Justicia Penal:** Intentos y conocidos logros, por parte de organizaciones criminales con fuertes recursos económicos, para trastornar e inhabilitar los sistemas de justicia penal, de por sí frágiles, en el plano nacional y local, por medio de extensa corrupción respaldada por violencia y la ideología.

✚ **Delitos financieros, explotando el refinamiento de la nueva tecnología electrónica** de los mercados comerciales y financieros de hoy. El lavado de dinero es un gran problema. El dinero se saca de contrabando de los paraísos fiscales en grandes cantidades, para llevarlo a países latinoamericanos que tienen leyes poco estrictas sobre el lavado de dinero.

✚ **Intentos, por parte de organizaciones criminales, de extender sus actividades a “nuevos estados víctimas”.** Se produce cuando Estados en la periferia del tráfico de drogas, son involucrados en éste. Para tales Estados esto implica: más violencia, provocada por delincuentes equipados como fuerza militar, debilitamiento de las normas civiles y pérdida de la legitimidad del gobierno, a medida que la delincuencia se desarrolla, pérdida de rentas públicas por falta de pago de impuestos de renta, pérdida de inversión extranjera y de comercio lícito por desconfianza y brusco debilitamiento político que impide reprimir drásticamente la delincuencia, con una fuerte degradación estatal que pone en peligro la gobernabilidad: las libertades individuales, los derechos humanos y la democracia.

✚ **Más violencia** que la conocida tradicionalmente, asociada con la delincuencia común, el crimen callejero, el secuestro y la extorsión para exigir rescate. En muchos países en América Latina, el secuestro se ha convertido en una actividad de la vida diaria.

✚ **Mayor contaminación ambiental**, producida por los traficantes de drogas o sus servicios ilícitos de eliminación de desechos. Los laboratorios para la elaboración de metanfetamina constituyen una preocupación creciente. Las sustancias químicas que se emplean son peligrosas y volátiles y el costo de limpieza de un laboratorio promedio, es de U\$S 40.000.

✚ **Más tráfico de armas** de mafias europeas hacia el sur. Además, con el fin de la guerra en América Central, hay un gran sobrante de armas disponible en las calles de un número creciente de países. Tampoco podemos pasar por alto la desviación de armas

hacia el mercado ilícito, procedentes de industrias nacionales de armas con sede en el Hemisferio Sur.

✚ **Más intentos por parte de delincuentes prófugos**, buscados internacionalmente, de usar América Latina como refugio contra la detención, arresto, extradición y enjuiciamiento.

✚ **Mayor consumo de drogas**. El uso de las drogas sigue a la producción de éstas y a las rutas de su tráfico y los problemas asociados con el uso, especialmente la delincuencia callejera. Veamos lo que ocurre en México, Colombia, Brasil, Argentina y, según cifras recientes, Venezuela tiene una tasa de toxicomanía más alta per cápita que Estados Unidos.

✚ **Más contrabando intrahemisférico de extranjeros indocumentados**, el que, aparte de generar ingresos, establece comunidades étnicas satélites “fuera de la ley” en los países receptores, las que se transforman en fuentes de candidatos para la formación de grupos delincuenciales y escondite local para delincuentes extranjeros de características étnicas similares, que quieran operar en el país víctima, sin atraer mucho la atención.

La gravedad de la situación estratégica latinoamericana reside en que es el asiento natural de las dos amenazas transnacionales de mayor envergadura: el narcotráfico y el terrorismo.

Además, en grandes áreas de la región estos dos hechos se combinan y retroalimentan mutuamente, para conformar el llamado **narcoterrorismo**.

Lo que califica de manera significativa la gravedad situacional estratégica de América Latina, es la carencia de una respuesta política a esta realidad, originada en la negación de la misma, ya sea por ignorancia, cuestiones de complicidad económica o por compromiso ideológico.

El narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo internacional, son amenazas de orden estratégico, que tienen como blanco al Estado y a la sociedad, atacando a su cohesión. No son un problema de seguridad pública, en el sentido policial del término. No se trata de una actividad delictiva común, si bien esa es su apariencia y modo operativo. Por su envergadura, su carácter transnacional, su poder de penetración en las estructuras estatales y la actividad económica privada, es un hecho / amenaza estratégica que se dirige directamente a destruir al Estado y a la sociedad en su conjunto.

Lo que tenemos frente a nosotros, es un fenómeno nuevo. Ello exige pensar de nuevo. Se trata de un hecho y riesgo de carácter estratégico, por ende correspondiente al área de la Defensa Nacional.

Los Estados están actuando individualmente o con leves coordinaciones, frente a un enemigo privado, bajo conducción unificada transnacional. Los Estados tienen problemas

diferenciados y reacciones distintas e individuales, ante un enemigo monolítico, sin códigos, que tienen la iniciativa, impone la división del trabajo y explota y cabalga las crisis estructurales de los Estados, en esta etapa de transición de nuestra civilización.

Dentro del MERCOSUR, Brasil, nuestro principal aliado, limita con los principales países productores/destiladores a través de fronteras selváticas y montañosas que dificultan el control del tráfico. **“Nuestro” límite (del MERCOSUR) más peligroso, es con las FARC**, que a través de un extenso dominio territorial en Colombia, con 18 frentes desplegados sobre las áreas de mayor producción de estupefacientes, **constituye el enclave narcoterrorista de mayor envergadura de América del Sur**. Con notorio y manifiesto apoyo de Cuba y China, las FARC poseen representantes políticos en todas las capitales de la región y sirven como sostén financiero a cuanto proyecto político “anti-sistema” emerja en el área.

Para la potencia hegemónica mundial, el narcotráfico representa una amenaza a su seguridad interna. Algunas cifras dan sustento a este concepto:

La Oficina Nacional de Medidas para Reglamentar el Consumo de Estupefacientes de EEUU ha publicado cálculos anuales, si bien conservadores, que revelan lo siguiente:

- Los ciudadanos de los EE.UU. gastan casi \$49 mil millones de dólares en narcóticos ilegales.
- Los gobiernos federal, estatales y locales colectivamente gastan \$30 mil millones de dólares en la tarea de disminuir la oferta y la demanda y en tratar los problemas causados por el consumo de narcóticos.
- El costo social de combatir el crimen causado por usar narcóticos es de \$67 mil millones de dólares.
- En los EE.UU. ocurren 25.000 fallecimientos/año de ciudadanos y miles de bebés son expuestos al efecto de los narcóticos en el útero de las madres que consumen estupefacientes mientras están en estado de gestación.

Hay otros costos indirectos. Los líderes de negocios y los industriales están al tanto de que el abuso de los estupefacientes merma sus ganancias, porque sus trabajadores desmejoran en rendimiento y productividad, sufren accidentes con mayor frecuencia, precisan de más cuidados médicos. El ausentismo y el robo son más frecuentes porque ésta es una manera que han encontrado los empleados para sostener sus vicios.

Los estudios han demostrado que los narcómanos tienen 3,5 veces más de probabilidad de accidentes en una planta fabril que los empleados abstemios; los adictos tienen cinco veces más de probabilidades para entablar demandas de indemnización por accidente; reciben el triple en prestaciones médicas que los abstemios y la capacidad de rendimiento de un empleado narcómano es apenas de un 67 por ciento. Cada año, esta clase de conducta entre los empleados narcómanos acarrea grandes pérdidas a la economía.

Ningún país, ni siquiera uno tan poderoso como los EE.UU., puede soportar por mucho tiempo que su economía tenga mermas anuales de más de \$146 mil millones de dólares. Ni tampoco puede absorber indefinidamente el grado de daño infligido a sus instituciones

sociales como el que ahora padecen, a causa del narcotráfico y del uso ilegal de estupefacientes.

Si bien es cierto que podemos calcular los costos en lo que respecta a la economía, jamás podremos cuantificar el número de víctimas y el dolor humano causados por los narcómanos y por el narcotráfico. No obstante, la mayoría de personas está al tanto del peligro mortífero que representan los estupefacientes, muy pocos se dan cuenta que más de 200.000 ciudadanos de los EE.UU. han perecido como resultado del uso ilícito de sustancias tóxicas en los últimos diez años.

A manera de comparación, en la Guerra de Corea el número de bajas llegó a 34.000 ciudadanos de los EE.UU., mientras que durante más de diez años de combates en Vietnam, fallecieron 47.000. Estas comparaciones nos dan una perspectiva de la magnitud del problema del consumo de narcóticos en los EE.UU. y han motivado a la nación y a sus Fuerzas Armadas a dedicarse más de lleno a lograr los objetivos de la Estrategia Nacional para Erradicar Estupefacientes.

Ante ésta alarmante situación, la respuesta imperial ha sido el “Plan Colombia”. Éste conduce inexorablemente a la expansión del narcoterrorismo sobre el “eje del Amazonas”, sobre el “eje de la Hidrovia Paraguay-Paraná” y hacia los puertos del Atlántico, para alcanzar su destino final en Europa, EEUU o Asia.

Visto en perspectiva, durante el último cuarto de siglo el conflicto armado en Colombia se ha agravado sustancialmente. Esto es bien visible, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Así por ejemplo, entre 1975 y 1995 el número de homicidios anuales en el país pasó de 4.455 a 25.398. De ellos, el número de víctimas directamente vinculadas con el conflicto político que enfrenta a guerrillas, paramilitares y fuerzas de seguridad pasaron de 49 a 3.336.

Algunos ejemplos son bien significativos en este sentido. En 1973 las FARC alcanzaron, por primera vez, el nivel de crecimiento en militancia y el grado de sofisticación táctica para coordinar la actuación de hasta 50 combatientes en el desarrollo de una sola operación. Cinco años más tarde, en marzo de 1978, el mando insurgente fue capaz de realizar una única acción en la que llegó a concentrar hasta 150 guerrilleros. La operación tuvo un carácter excepcional; pero marcó un nuevo techo operativo de la organización. Para abril de 1996, en el asalto a la base del Ejército en Las Delicias, departamento de Putumayo, el mando del Bloque Sur de las FARC llegó a coordinar el despliegue de 400 combatientes pertenecientes a cinco frentes y una compañía de fuerzas especiales.

Este nuevo salto operativo respondió a una decisión tomada conscientemente por las FARC y el ELN, para lanzar lo que denominaban la "Insurrección General", una escalada militar diseñada para alcanzar el máximo impacto sobre la situación política del país.

Hoy, 192 de los 1.065 municipios colombianos carecen de presencia policial y la autoridad reposa virtualmente en manos de los grupos armados irregulares. Solamente cinco de ellos pertenecen a la llamada zona de despeje, un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados del sur del país que el gobierno de Andrés Pastrana hace tres años entregó

oficialmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para hablar de paz con ellas.

Los niveles de frustración social respecto de las políticas de paz de Pastrana han invadido a la sociedad colombiana y llegado, incluso, a la oficina del propio vicepresidente, Gustavo Bell (hoy ministro de Defensa Nacional). El día jueves 8 de Agosto de 2001 reclamó, en nombre de las fuerzas militares, “la urgencia de tener un estatuto y un plan de movilización nacional”.

El llamado de Bell coincide con una solicitud recurrente del general Fernando Tapias, comandante de las fuerzas militares, en el sentido de que se promulgue una legislación de guerra. Sostiene que es prácticamente imposible enfrentar un estado de conmoción interna bajo el imperio de una legislación de paz como la actual. “Cuando hay guerra, se debe movilizar todo el estado”, sentenció.

Tapias explica que sus tropas van al campo de batalla “como un boxeador al que obligaran a pelear con los ojos tapados y los pies y las manos amarradas”.

La ley, sin embargo, abre la posibilidad de que las fuerzas armadas puedan ejercer algunas funciones de policía judicial, que hoy corresponden únicamente a la Fiscalía General de la Nación. Esto, sin embargo, ha sido impugnado por organismos internacionales defensores de derechos humanos, que cuestionan constantemente a los militares colombianos.

El General Tapias declaró que para enfrentar con garantía de éxito a los irregulares, el Estado no solamente tiene que ampliar su pie de fuerza, hasta lograr la relación de 11 a uno recomendada, sino perfeccionarse en los siguientes campos:

- ❖ Aumentar su capacidad de movilización aérea, terrestre y fluvial.
- ❖ Ensanchar notablemente su capacidad de inteligencia militar, para anticiparse a los golpes enemigos.
- ❖ Cohesionar a la población civil con el Estado.
- ❖ Conseguir que el Estado y la autoridad que representa tengan presencia real en todo el territorio nacional.

Otras fuentes militares dijeron que la velocidad de las tropas colombianas en zonas selváticas de guerra suele ser de tres kilómetros por día. Esto se debe, principalmente, a la carencia de helicópteros y de embarcaciones fluviales suficientes.

Para el general Tapias y otros oficiales del alto mando, como el general Jorge Mora, comandante del Ejército, la necesidad de robustecer a las fuerzas militares debe producirse con la urgencia que demandan el crecimiento y la carrera armamentista en que están comprometidos los guerrilleros y los paramilitares.

Esas fuerzas, enemigas entre sí, ya no plantean una guerra de guerrillas tradicional sino de posiciones, alrededor de las zonas del país donde prevalecen los cultivos de hoja de coca

y amapola, apropiados para la producción de cocaína y heroína por medio de procedimientos en los que se utilizan precursores químicos que son fabricados y vendidos ilícitamente por Estados Unidos y Europa.

Las informaciones más recientes, basadas en fotografías de satélites, indican que en Colombia existen 160,000 hectáreas de hoja de coca, el área de cultivos ilícitos más grande que se haya concentrado jamás en país alguno.

La lucha se da por el predominio de esas zonas. Las FARC tienen ingresos anuales líquidos estimados en \$430 millones, de acuerdo con Juan Carlos Echeverry, director del estatal Departamento Nacional de Planeación.

El Ministerio de Defensa, en cambio, dice que esos ingresos llegan a \$590 millones. Otra cantidad parecida la obtienen del secuestro, la extorsión y el asalto de bancos, entre otras actividades.

El poder económico de los bandos armados, enemigos entre sí, les permite pertrecharse en condiciones muchas veces superior a las del Ejército y aumentar constantemente el tamaño de sus tropas por medio, incluso, del reclutamiento forzoso y de menores de edad.

Las FARC, por ejemplo, han dicho que su meta es la de llegar a tener lo antes posible, un ejército de 100,000 hombres y aunque hoy ya tienen la fuerza irregular más grande del país, los paramilitares conservan un ritmo de crecimiento superior. El de aquellos ha sido de 40% durante los últimos dos años y el de éstos de casi 100%.

Mientras el gobierno de Pastrana toma su tiempo para aceptar o no que está en guerra y reordenar eventualmente el funcionamiento del estado conforme a esa realidad, como lo reclama el general Tapias, la conflagración nacional ya ha causado el desplazamiento forzoso de dos millones de campesinos, hoy agazapados en los cinturones de miseria de las ciudades; otros seis millones de colombianos se han ido del país y 1.750.000 hectáreas de tierras agrícolas están abandonadas.

También dentro de América Latina, los agentes de la violencia no-estatal de Colombia han establecido importantes vinculaciones en Venezuela. Los cárteles de la droga colombianos han buscado una ruta alternativa, para dar salida a los narcóticos a través del delta del Orinoco. Paralelamente, los productores de droga en Colombia obtienen a través del país vecino grandes cantidades de precursores químicos, necesarios para sintetizar los narcóticos. La importancia de Venezuela para el tráfico de estupefacientes se complementa con su relevancia como vía de suministro de armas a los grupos armados colombianos. De hecho, se calcula que hasta el 90 % de las municiones consumidas por estas organizaciones son vendidas de forma ilegal por miembros del Ejército venezolano. En este contexto, la voluntad expresada por el presidente Chávez de negociar con las guerrillas colombianas, ha suscitado una enorme preocupación en el gobierno de Bogotá.

Lo cierto es que, con independencia de la voluntad de Caracas, guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes colombianos cuentan con una base en Venezuela, gracias a la imposibilidad de controlar la extensa frontera común.

Las guerrillas también cuentan con apoyos en Brasil. El territorio amazónico de este país, concretamente la región Cabeza de Perro, es utilizado como base para transbordar armas y, sobre todo, alimentos a través del río Içama para los insurgentes colombianos.

También dentro del esquema de suministros de los grupos armados colombianos, Surinam parece haberse convertido en el escenario de intercambio de armas por cocaína, gracias a las dificultades para controlar un territorio cubierto de jungla. Dentro de los países de la región en los que los grupos armados colombianos han establecido vínculos, es imprescindible citar a Ecuador por donde, a mediados de los años 90, circulaba entre un 6 y un 10 % de la cocaína que alcanzaba EE.UU., además de una parte importante de los precursores químicos de la droga que alcanzaban Colombia y cuya venta beneficiaba directamente a la economía local. En último lugar, habría que señalar a Cuba, que todavía mantiene lazos históricos con las guerrillas colombianas, pero que ha reducido radicalmente su respaldo a estos grupos con el fin de ganar cierta respetabilidad internacional.

Por el contrario, la isla se ha convertido en un punto de apoyo crítico para los envíos de narcóticos que cruzan el Caribe en dirección a EE.UU.

Por otra parte, otra dimensión clave de la internacionalización de los agentes armados no-estatales, ha sido la vinculación con las mafias de la antigua Unión Soviética. En este sentido, las organizaciones criminales rusas han podido heredar algunos de los vínculos que, durante la Guerra Fría, establecieron los insurgentes colombianos por motivos de afinidades ideológicas. En cualquier caso, los nuevos vínculos entre narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares colombianos, por un lado y el crimen organizado ruso, por otro, tienen una naturaleza nueva. El inicio de los contactos puede situarse en 1992, cuando un representante del Cartel de Cali fue detectado en Moscú. A partir de ahí, el narcotráfico colombiano se ha dedicado a alimentar el mercado de narcóticos en plena expansión de Rusia. El grado de integración entre los grupos rusos y colombianos en el tráfico de narcóticos ha llegado a ser muy elevado, hasta el punto de que se puede hablar de operaciones conjuntas de grandes dimensiones, en las que los cargamentos de estupefacientes se miden en toneladas .

A cambio de las drogas, los rusos han proporcionado a las mafias colombianas materiales y servicios únicos. Para empezar, equipo de alta tecnología donde, además del caso del submarino o el intento de venta de misiles tierra-aire, se puede sumar la transferencia de algunos helicópteros. Pero además, las mafias rusas se han convertido en los grandes responsables del "blanqueo" de los beneficios de las mafias colombianas procedentes del tráfico de drogas. La aplastante presencia de la mafia en el sector financiero de Rusia, donde podría ser propietaria de un tercio de las instituciones bancarias, convierte a la economía de este país en una enorme maquinaria de lavado de dinero sucio, por donde pueden desaparecer con facilidad los millones de dólares ganados con el tráfico de drogas por las grupos delictivos colombianos. Para facilitar la llegada de los fondos a territorio

ruso, numerosos bancos de esta nacionalidad han abierto oficinas en los paraísos fiscales del Caribe.

Dentro del tercer y último apartado de los contactos internacionales de los agentes de violencia política o común colombianos, se pueden introducir una serie de vínculos con grupos o estados con los que se han mantenido relaciones por intereses de tipo práctico, por afinidades ideológicas o por ambas cosas al mismo tiempo. En ese capítulo, es imprescindible mencionar las relaciones de "negocios" que mantienen los carteles de la droga colombianos con las mafias mexicanas e italianas.

Pero además, son particularmente relevantes los vínculos que han asociado, desde hace tiempo, a algunos grupos insurgentes colombianos, particularmente las FARC, con países árabes y movimientos armados pertenecientes a esta región.

En este sentido, hay que señalar que a mediados de los noventa se hizo pública la noticia de que esta organización guerrillera había entrenado un grupo de pilotos en un país norafricano. Posteriormente, otras señales han tendido a apuntar a que existen algunas relaciones que unen a Libia con grupos armados colombianos de carácter político o mafioso. Así, es conocido que el miembro del Cartel de Medellín, Gustavo de Jesús Gaviria, abatido por las fuerzas de seguridad de Bogotá, hizo llegar cocaína a Libia. Más recientemente, las autoridades brasileñas interceptaron una avioneta, en ruta a Colombia, que transportaba un cargamento de armas marcado con identificaciones del ejército libio. Estas relaciones con Trípoli han estado también acompañadas por ciertos vínculos entre algunos grupos armados colombianos y equivalentes suyos de Oriente Medio. Así, las FARC mantienen vínculos con el grupo islamista libanés, Hezbollah. Tal vez esta conexión con El Líbano explique porqué los guerrilleros colombianos han llegado a establecer también vínculos con el Ejército Rojo Japonés (ERJ), un grupo terrorista que durante años mantuvo sus bases en el citado país de Oriente Medio. De hecho, un grupo de quince militantes del ERJ fue detectado en abril de 1997 en la región colombiana de Uraba, proporcionando entrenamiento a combatientes de las FARC.

Los cambios tecnológicos en el campo de la producción de narcóticos ha sido decisivo para la evolución del conflicto interno en Colombia, en la medida en que los agentes de violencia no-estatal obtienen el grueso de su financiación del comercio ilegal de estas sustancias.

De hecho, de los 530 millones recaudados por las FARC en 1997, cerca de 348 (en torno al 65 %) procedía del tráfico de narcóticos, bien a través de la "protección" pagada por los traficantes independientes o de la creciente participación directa de la guerrilla en la producción de drogas. Por su parte, el ELN y los paramilitares integrados en las AUC, también dependen de los beneficios de los narcóticos, aunque en menor medida, ya que mantienen vías alternativas de financiación. Así, de los 380 millones de dólares que recaudó el ELN en el año citado, 112 (el 29 % del total) fueron el resultado de rescates obtenidos a cambio de la liberación de rehenes.

En este contexto, las innovaciones en el tráfico de narcóticos han estado vinculadas a tres cuestiones básicas:

- la introducción de nuevos productos,

- los cambios en el proceso de síntesis y
- la creación de nuevas formas de camuflaje para facilitar su introducción en los mercados de Europa y EE.UU.

La introducción de tecnologías con prestaciones de alta calidad multiplica y aumenta la capacidad para llevar a cabo las operaciones habituales en su repertorio de acciones. Así, por ejemplo, la introducción de armas de infantería- fusiles de asalto, por ejemplo, capacita a las guerrillas para desarrollar sus tácticas de emboscada y otro tipo de acciones tradicionales en este tipo de conflictos. Pero al mismo tiempo, la innovación técnica abre la puerta para abordar acciones completamente inéditas hasta el momento. Uno de los ejemplos más evidentes en este caso, es la posibilidad de hostigar el tráfico aéreo que se abre con la adquisición de misiles tierra-aire.

La distancia entre el poder del estado y aquel de los agentes anti-estatales se reduce. Un buen ejemplo de este proceso se puede ver en las consecuencias sobre el conflicto en Colombia, a través del aumento en el número y calidad de las armas ligeras a disposición de los grupos narcoterroristas.

En la medida en que la mayor parte de los combates entre los grupos armados irregulares y el gobierno se reducen a choques de infantería, es evidente que las fuerzas armadas y de seguridad colombianas han perdido toda ventaja cualitativa en su armamento individual. A este nivel, los efectivos gubernamentales y los delincuentes políticos o comunes, disponen de recursos equiparables. Frente a esta situación, la respuesta habitual de las fuerzas estatales es elevar el umbral de la violencia de sus acciones, con el fin de imponerse sobre los grupos armados no-estatales. Para ello pueden recurrir al incremento cuantitativo de sus medios o a la introducción de medios de combate más potentes. Pero, sea como sea, el resultado es el mismo: la sofisticación de las capacidades de los agentes de violencia no-estatal, conduce a una escalada general del nivel de violencia.

Por su parte, el proceso de internacionalización de los grupos irregulares colombianos, conduce a multiplicar su autonomía. Esto es particularmente cierto en la medida en que están creando redes densas de apoyo internacional y por lo tanto que resulta difícil aislarles del exterior.

La independencia de estos grupos es mayor si se tiene en cuenta dos factores:

- ✚ Por un lado, el hecho de que los puntos de apoyo internacionales que construyen son, en su mayor parte, asociaciones con otros actores no-estatales clandestinos. Esto hace que estas redes de apoyo escapen a las presiones diplomáticas, económicas o militares que tradicionalmente se había ejercido para contrarrestar el terrorismo patrocinado por Estados. De alguna manera, es mucho más complejo presionar a organizaciones clandestinas para que abandonen la colaboración con un grupo de similares características, que hacerlo sobre un estado formalmente constituido.
- ✚ Por otra parte, las redes internacionales en las que se apoyan los grupos armados colombianos son lo suficientemente poderosas, en cuanto al manejo de recursos tecnológicos, económicos y militares, como para que no necesiten complementar su

apoyo con el prestado por un estado. O dicho a modo de ejemplo, ¿qué puede proporcionar Libia a las FARC, que no puedan obtener a través de sus relaciones con la mafia rusa?

Los procesos de innovación tecnológica y globalización tienden a reforzarse mutuamente. De hecho, la incorporación de nuevas tecnologías favorece la globalización, en la medida en que ofrece medios para llevarla a cabo. No solo proporciona mejores equipos de comunicación y transporte. Además, el incremento de la experiencia en el uso de una determinada tecnología o del desarrollo de un cierto tipo de operación, permite contar con algo que intercambiar con un potencial socio global.

Frente a este perfil, las fuerzas estatales perderán buena parte de las ventajas que mantenían en términos tecnológicos. Además, se encontrarán con adversarios dotados de estructuras difusas, frente a las que es más complejo diseñar estrategias para su desarticulación. Asimismo, no podrán confiar en acciones sobre otros estados, para aislar de sus fuentes de recursos exteriores a los grupos violentos no-estatales. Como consecuencia, las posibilidades del estado colombiano para mantener el orden y la estabilidad interior, la primera condición para desarrollar una acción de gobierno, se reducirán notablemente.

No hay razones para pensar que esta tendencia no se repita en escenarios distintos del colombiano, donde los gobiernos se enfrentan a una combinación de violencia de motivación política y económica similar.

En determinados países, resulta imprescindible tener en cuenta la dinámica de las redes ilegales que operan en su territorio para comprender su evolución económica y política. Entre ellos se encuentran Italia, Rusia, las repúblicas de la antigua Unión Soviética, Argentina, Colombia, México, Bolivia, Perú, Venezuela, Turquía, Afganistán, Birmania, Tailandia, Japón, Taiwan, Hong Kong y una multitud de pequeños países.

Así como está vinculada a diferentes capas de la sociedad, la economía ilegal impregna los mecanismos estatales, llegando algunas organizaciones a asumir, en ocasiones, competencias propias del Estado, en aquellas zonas donde éste es débil o inexistente. Ejemplos de ello son el programa de viviendas y servicios sociales para pobres, que financió Pablo Escobar en Medellín (Colombia), o en el desarrollo de las favelas en Sao Paulo y Río de Janeiro (Brasil), donde los servicios sociales dependen en cierto sentido de la economía de las drogas, en manos privadas y criminales.

Otra forma de la que la economía ilegal llega a las instituciones estatales es a través del soborno o la intimidación de políticos, policías, funcionarios o jueces, con lo que se crea un aparato o cordón de seguridad en torno al negocio. A ello contribuye la corrupción de la "política democrática" (término recogido de Castells), o, como lo denomina Rosa del Olmo, la "criminalidad estatal organizada".

En los años noventa se han producido transformaciones importantes en la división internacional del trabajo de la industria de las drogas:

- ⊕ Aparición de México, como centro de exportación semiautónomo.
- ⊕ Revitalización de la capacidad productiva de Bolivia y Perú en procesar y exportar cocaína con rutas propias.
- ⊕ Reordenamiento de los carteles colombianos. Tras la desarticulación de los carteles de Cali y Medellín, han surgido aproximadamente 12 núcleos fuertes, que integran entre 80 y 250 grupos pequeños.
- ⊕ Amplio uso de la nueva tecnología de la comunicación, sobre todo teléfonos móviles y ordenadores portátiles, para comunicarse y seguir el curso de las transacciones.

Las rutas del tráfico de drogas prohibidas en América Latina han ido cambiando con el paso del tiempo. Bolivia exporta su producción, de la cual hay una parte cada vez más importante de clorhidrato de cocaína (tradicionalmente exportaba la hoja de coca o la pasta base), a través de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile.

Perú produce y exporta clorhidrato de cocaína a México y envía cocaína peruana y marihuana colombiana hacia Europa y Estados Unidos, por vía marítima o aérea. Ecuador por su parte, también experimenta un tráfico intenso en su territorio: pasta base en dirección Norte-Sur y clorhidrato en dirección Sur-Norte, éste desde sus puertos, principalmente. A mediados de los años noventa, las rutas de América Central y del Norte experimentaron un auge en detrimento de las del Caribe, pero desde finales de 1997, las rutas caribeñas han conocido un nuevo crecimiento de actividad.

Los cárteles colombianos han comenzado a mirar hacia el sur.

Han extendido sus bases a Brasil, según lo refirió un vocero de la DEA, William Alden. Más de un millón y medio, de los cinco millones de cariocas que viven en las 545 favelas de Río de Janeiro, construidas en las escarpadas laderas de sus morros, están fuera del control del Estado.

“Folha de Sao Pablo” publicó que “el nivel de criminalidad en San Pablo excedió los promedios registrados en EEUU, Italia, Gran Bretaña y Sudáfrica”.²

El general Alberto Cardoso, Jefe de la Casa Militar del Planalto sostenía, en 1999 que: “el poder narco es actualmente la mayor amenaza a la seguridad nacional y controla zonas estratégicas del país” “...en las colinas y montañas que rodean a Río de Janeiro existe un Estado paralelo comandado por el narcotráfico...que posee zonas liberadas en estados nordestinos y otros puntos fronterizos. Esto se debe a LA DESAPARICION DEL PRINCIPIO DE AUTORIDAD POR PARTE DEL ESTADO, FRENTE AL AVANCE DE LOS CARTELES DE LA DROGA”³

La problemática del narcotráfico en Brasil tiende a agravarse a partir de los últimos años. Tal situación se basa en el creciente protagonismo que cabe al cuerpo social de éste país

² “Folha de Sao Pablo”, 2-1-1998.

³ “Clarín”, 28-1-1998, página. 14.

como consumidor y a la ubicación y características del mismo en América del Sur. A través del Amazonas circulan anualmente más de 6 toneladas de cocaína pura, por un valor de comercialización de 800 millones de dólares.

El diario “La Nación”, expresaba en una relevante nota⁴:

“Brasil gasta globalmente, entre los fondos públicos destinados a la seguridad y el desembolso de ciudadanos preocupados por la violencia, 43.000 millones de dólares, equivalentes al 10,5 por ciento del producto bruto interno (PBI). Ese cálculo, publicado ayer por O’Globo, fue elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), basándose en informaciones de los últimos años de la década de 90. Esos gastos públicos y privados originados por la violencia, según el BID, son mayores que toda la riqueza producida en un año en un país como Chile.

*El comandante general de la Policía Militar (PM) de Río de Janeiro, coronel Wilton Ribeiro, frente a esos datos, opinó que el país “**está en una guerra**” y destacó que alrededor de 150 policías militares fueron muertos, en esa ciudad, en lo que va del año, en confrontaciones con delincuentes y traficantes”.*

“Estamos en una guerra; nos atacan con granadas, fusiles AK-47 y M-16”, opinó el coronel y destacó: “Estamos preparados para esa guerra”.

“Cuando se escoge la profesión de policía ya se sabe el riesgo que se corre y eso ocurre en todo el mundo, sólo que en Río de Janeiro y en Brasil, el riesgo es doble o triple”, consideró.

En Brasil, la proporción de criminalidad llega a 40 homicidios por 100.000 habitantes, índice de países en guerra interna.

La violencia afecta directamente el bolsillo de los brasileños por las altas sumas de dinero que los ciudadanos deben destinar a su autodefensa.

Los últimos informes de los organismos internacionales indican que, además de Brasil, la violencia tiene un alto costo en Colombia, con un 24,7 por ciento del PBI y en Perú, con un 5,1 por ciento.

Brasil no sólo es país consumidor dentro del circuito, sino que se ha convertido en procesador y depositario de la droga “altamente refinada”, que aumenta su valor de venta. Ha sido clasificado últimamente como el *principal exportador* hacia los EEUU y Europa, entre otras por las siguientes razones:

- ⊕ Incremento del movimiento de los narcotraficantes, como consecuencia de la persecución que sufren en Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, etc.-

⁴ “La Nación”, 13-8-2001. Sección exterior, página 2.

- ⊕ Extensión de fronteras terrestres de 16.000 kms, lindando con los principales países productores.-
- ⊕ Posesión de grandes extensiones selváticas difíciles de controlar.-
- ⊕ Existencia de importante red de carreteras, medios de comunicación y sistema fluvial que operan como vías de transporte y tránsito (Ej. río Amazonas).-
- ⊕ Producción de insumos para el refinamiento como carbonato liviano, bicarbonato de sodio, thinner, permanganato y ácido clorhídrico.-
- ⊕ Existencia de insumos como acetona, cloroformo y éter, que ingresan desde Alemania y EEUU, a través de Paraguay y Ecuador.-

En el territorio federal del Brasil, se destacan tres regiones geográficas de producción, las cuales pueden ser identificadas como Nordeste, Noroeste y Centro.

La primera se ubica a 500 Km al oeste de Recife y 3000 Km al norte de Rio de Janeiro, abarcando una superficie que, no obstante sus contornos difusos, se asemeja a un triángulo con una superficie superior a la de Holanda. Su producción de marihuana y cocaína se calcula en una tasa media de 500 kg. diarios, abasteciendo por sí sola al mercado interno y generando saldos exportables.-

La región Noroeste comprendería los estados de Amazonas, Roraima y Para, siendo su principal producción el EPADÚ (coca amazónica). Se presume que la región sirve de asentamiento a comerciantes de estupefacientes de origen colombiano y venezolano, los cuales utilizarían como epicentro de su actividad, la ciudad de Manaus. Debido a lo vasto del territorio, se desconoce la verdadera dimensión de los cultivos.

La tercera región, denominada Centro, se localiza en los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, configurando la continuación del llano-amazónico boliviano. El principal cultivo es el epadú, aunque en menor escala se registran plantaciones de marihuana. Los principales epicentros de actividad en la región se ubican en las localidades de Campo Grande y Corumba, desde donde se dirige el abastecimiento interno, la exportación e importación de insumos de **Bolivia y Paraguay.-**

Cerca del 80% de la cocaína boliviana que llega a Brasil pasa por Corumbá, capital del Estado de Mato Grosso Do Sul, fronteriza con Bolivia, UNA CIUDAD QUE TIENE MAS FARMACIAS QUE CARNICERIAS. Allí el comercio del éter y de la acetona, materias primas para refinar la cocaína- es muy bueno, y la policía asiste impotente a situaciones tales como la de una farmacia que llega a vender increíbles 462 litros de acetona por mes.

Vastos sectores de la opinión pública brasileña están persuadidos de que su país está perdiendo la guerra contra el narcotráfico.

Si esto es así, NO PASARÁ MUCHO TIEMPO PARA QUE ESTA ACTIVIDAD ILEGAL LLEGUE A AFECTAR SERIAMENTE A LAS INSTITUCIONES POLITICAS, TAL COMO OCURRE ACTUALMENTE EN COLOMBIA.

En Brasil, la organización mafiosa japonesa “**yakuza**” se ha instalado en el corazón del barrio Libertad de San Pablo, donde viven miles de nipones apretujados en veinte manzanas. Trabajan con empresas comerciales de fachada y cobertura legal (restaurantes,

bares, compañías de importación y exportación), pero están involucrados en el contrabando y todo tipo de actividades ilícitas, especialmente el narcotráfico.

A partir de comienzos de los años ochenta, Brasil se convierte en un país de tránsito de la cocaína producida en los países andinos, principalmente Bolivia. Pero, con el paso de los años, creció el poder de los traficantes, principalmente en los Estados fronterizos de Mato Grosso do Sul y de Rondônia, y, con ello, su autonomía. El clorhidrato de cocaína sigue transitando, pagado en efectivo, pero igualmente trocado, en particular por vehículos. Las incautaciones –5.224 t en 1995 y 3 t en 1996– sólo corresponden a una pequeña cantidad de las drogas que transitan por el país.

Por otra parte, los laboratorios de transformación de pasta base en clorhidrato se han multiplicado, no tan sólo en la Amazonia, sino que también en las zonas urbanas. Esta situación tiene un impacto muy importante en el consumo interno. Interpol calcula que en la ciudad de Río de Janeiro solamente, se consumen 3 t de cocaína por año, bajo forma de clorhidrato inhalado o base fumada. El consumo del crack ha conocido igualmente un importante aumento, en particular en São Paulo, donde las incautaciones pasaron de 10 kilos en 1995 a 18 Kg. durante los seis primeros meses de 1996. El mercado interno y las exportaciones generan importantes ganancias, que son recicladas en la economía. Finalmente, al contribuir al desarrollo de la delincuencia en las favelas, el tráfico de drogas tiene un papel importante en los conflictos *que oponen el Estado a las organizaciones criminales, así como a éstas entre sí, por el control de los territorios urbanos*.

El problema de la Amazonia.

En la Amazonia brasileña se desarrolla actualmente uno de los proyectos más importantes del gobierno federal: el Sistema de Vigilancia de la Amazonia (SIVAM). (Parte del C3I2). De un costo estimado de 1.400 millones de dólares, dicho programa tiene por objetivo la elaboración e implantación de una base logística dotada de las nuevas tecnologías disponibles en el mercado internacional, para la detección, adquisición y transmisión de informaciones sobre la región amazónica. Elaborado en 1990 por iniciativa del Secretariado de Estudios Estratégicos (SAE), el Ministerio de Aeronáutica y el Ministerio de Justicia, el SIVAM fue concebido como un instrumento al servicio del Estado para un mejor control del territorio.

Este objetivo es prioritario para el gobierno brasileño. La represión de las actividades ilícitas, fundamentalmente el tráfico de drogas, parecería pasar a un segundo plano. Sin embargo, una cartografía que no se limite a la Amazonia brasileña, sino que abarque a la totalidad de la cuenca hidrográfica del Amazonas, situaría en su verdadera perspectiva geoestratégica el complejo coca-cocaína. El conjunto de esta cuenca totaliza 7.800.000 km², de los cuales el 66% pertenecen a Brasil, el resto incluye no solamente las zonas amazónicas, sino también las regiones montañosas de los países andinos.

En los valles altos del Huallaga y del Ucayali, afluentes del Amazonas, se produce la mayor parte de la coca-cocaína peruana; en Bolivia, las principales regiones productoras de coca, el Chapare y los Yungas, están conectadas por vía fluvial con los ríos Guaporé y Madeira, que atraviesan la parte central de la Amazonia brasileña; en Colombia, las zonas

productoras de coca y cocaína están situadas en los valles altos del Apaporis y Caquetá, que toma el nombre de Japurá en Brasil, así como en los valles del alto Vaupés y del Putumayo, llamado Iça en Brasil. Además de las redes fluviales y aéreas, hay ferrocarriles y caminos que conectan las zonas productoras de coca de Bolivia, no tan sólo con la Amazonia brasileña, sino también con los Estados de Mato Grosso do Sul y São Paulo, en el centro-sur de Brasil. Los valles andinos colombianos, por su parte, comunican con Manaus a través de Venezuela, con caminos en su mayoría asfaltados. En el plano logístico, el transporte de droga se caracteriza por la multiplicidad de rutas y centros de distribución que sirven para el almacenamiento: plataformas de exportación, lugares de venta o simples puntos de tránsito.

Algunos de estos corredores amazónicos usados para ingresar a Brasil son:

- a) El corredor Colombia-Brasil, dividido en dos rutas principales:
 - a) la ruta de Venezuela, que entra en Brasil por el territorio de Roraima, pasa por Manaus y se conecta con Guyana;
 - b) La ruta del curso superior del río Negro, que pasa por São Gabriel da Cachoeira y llega a Manaus.
- b. El corredor Perú-Colombia-Brasil, a través del curso superior del río Solimões, que une los valles bajos del Huallaga, Ucayali y Marañón, en Perú, y el río Putumayo, en Colombia, con Manaus, pasando por las ciudades de Iquitos (Perú), Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil).
- c. El corredor Perú-Brasil, cuyo principal punto de entrada es el Estado de Acre, y que se divide en dos rutas:
 - a) Puerto Portillo (Perú) a Cruzeiro do Sul (Brasil);
 - b) Puerto Maldonado (Perú)-Cobija (Bolivia)-Nova Brasileira-Rio Branco (Brasil).
- d. El corredor Bolivia-Brasil, que tiene la mayor cantidad de variantes:
 - a) Carretera federal BR 364; Magdalena (Bolivia), Costa Marques (Brasil), Cacoal-Ji Paraná.
 - b) la ruta del territorio de Rondonia (Brasil), via Guayamerin (Bolivia)-Guajamirim-Porto Velho (Brasil) que conecta los Yungas con Manaus por el alto valle del Beni y al sureste de Brasil por la carretera BR 364;
 - c) la ruta del Pantanal: al norte, vía Cochabamba (Bolivia)-Cáceres-Cuiabá (Brasil), pasando por Barra do Garças en dirección de Goiânia, en el Estado de Goiás, o en dirección de Uberlândia y Ribeirão Preto; al sur, vía Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)-Puerto Suárez (Bolivia)-Corumbá (Brasil), en

dirección a Campo Grande, en el Estado de Mato Grosso do Sul, y al oeste hacia el Estado de São Paulo (Brasil).

- e. El corredor Bolivia-Paraguay-Brasil, con las siguientes rutas:
- a) Pedro Juan Caballero (Paraguay)-Ponta Porã (Brasil)-Londrina (Brasil);
 - b) Ciudad del Este (Paraguay)-Foz do Iguaçu (Brasil), en dirección a los puertos de Paranaguá, Santos y Río de Janeiro (Brasil).

Tres aspectos de la logística del tráfico de drogas pueden destacarse: en primer lugar, las rutas utilizadas son de doble sentido, es decir que la droga viaja en dirección al Atlántico, mientras que, en la dirección contraria, cereales, oro, joyas, material electrónico, productos químicos y vehículos robados pasan de contrabando hasta el Pacífico. En segundo lugar, se utilizan diferentes medios de transporte: fluviales, aéreos, marítimos, ferrocarriles o pistas.

Si el tráfico recurre cada vez más a las vías fluviales y caminos, a pesar de la inexistencia de un sistema de control radar en Amazonia brasileña –situación que debería ser remediada, precisamente, con la instalación del SIVAM– ello se debe a la multiplicación de laboratorios alimentados con pasta base, una materia prima voluminosa y barata proveniente de Bolivia, que es más práctico y más barato transportar por tierra o por las vías fluviales. Los colombianos del cártel de Cali fueron los primeros en deslocalizar una parte de la transformación de la pasta base hacia Brasil, que consideraban más seguro, sin renunciar por ello a hacer transitar importantes cantidades de clorhidrato. Pero, al mismo tiempo, se desarrollaban las actividades de los empresarios locales, que se abastecían con pasta base en Bolivia y sólo dependían del cártel de Cali para su acceso al mercado internacional.

Con el repliegue del cártel de Cali, sus posibilidades han aumentado, tanto más si se considera que disponen para sus exportaciones de una serie de puertos en la costa: Salvador de Bahía, Vitória, Recife y Fortaleza.

A pesar de la carencia de datos sobre el volumen de droga que transita por cada una de las rutas, se puede considerar que los Estados de São Paulo y de Paraná, dada la existencia de grandes puertos en sus litorales respectivos, son los principales territorios de transformación y, por consecuencia, de llegada de la mayoría de las rutas de tránsito.

El tráfico en los Estados de Mato Grosso y Rondônia

Se puede estudiar la historia del narcotráfico en la Amazonia brasileña a través de su presencia en dos Estados particularmente sensibles por sus fronteras con Bolivia. El comercio ilegal de cocaína tomó verdaderamente vuelo a comienzos de los años ochenta. Los primeros Estados brasileños afectados fueron aquellos fronterizos con Bolivia, es decir Mato Grosso do Sul, Mato Grosso y Rondônia. En un comienzo, los brasileños intercambiaban con los traficantes bolivianos éter y acetona por clorhidrato de cocaína, que

reexportaban sobre todo a Estados Unidos. Durante los años ochenta, las ciudades fronterizas de la Amazonia conocieron un verdadero auge de sus actividades comerciales.

Esta época dorada se vio trastornada a partir de los años ochenta, cuando miles de buscadores de oro comenzaron a trabajar en el río Mamoré, que forma la frontera entre Brasil y Bolivia. Los yacimientos (garimpos) se convirtieron en el teatro de una intensa actividad de blanqueo de narcoganancias, en particular a través de la compra de oro no declarado a un precio mayor que el precio oficial. Muchos de los garimpeiros se lanzaron directamente en el comercio ilegal, comenzando a fumar regularmente pasta base. Se produjo entonces una multiplicación de las redes de comercialización en la frontera y, sobre todo, se disparó el consumo interno, que se propagó a todos los grandes centros urbanos del país.

En las rutas de la cocaína, todos los traficantes urbanos eran encubridores, alrededor de los cuales giraban bandas de jóvenes consumidores-ladrones-distribuidores que trataban de controlar los territorios de sus barrios respectivos. Al mismo tiempo, en la frontera, la droga se trocaba cada vez más por bienes locales sustraídos al mercado legal (producción agrícola, cosechas de café y arroz, ganado o producción minera: casiterita), así como también por riquezas robadas regionalmente y, rápidamente, a escala nacional (automóviles, camiones, joyas, ganado, maquinarias agrícolas o de construcción, antenas parabólicas, aviones, etc.)

Es en las ciudades pioneras, a lo largo de la carretera federal (Ariquèmes, Cacoal, Ji Paraná, etc.), donde se encuentran los verdaderos centros de tránsito y de acumulación de los narcocapitales de la región. El clorhidrato de cocaína, que se compra a 1.500 dólares en la frontera y vale 3.000 dólares en todas las ciudades, cualquiera que sea la distancia del punto de compra. De manera que los traficantes de la BR 364 no tienen otra salida para vender su mercadería que las grandes ciudades de la costa o del centro sur (Fortaleza, Recife, Bahía, Espirito Santo, Río de Janeiro, Brasilia, Goiânia, São Paulo, etc.), en donde la cocaína se vende entre 10.000 y 15.000 dólares el kilo y que abren a su vez la vía para la exportación.

Desde que se ha intensificado la represión en Bolivia, con la destrucción de pistas y laboratorios, la policía brasileña ha podido constatar un nítido aumento de las importaciones de pasta base con respecto a las de clorhidrato. Desde hace unos dos años, el polvo se fabrica cada vez más directamente en Brasil, en la selva, en pequeños laboratorios móviles, fácilmente desarmables, que trabajan en función de los pedidos. El comercio ilegal de productos químicos tiende a aumentar dentro de las propias fronteras de Brasil.

Cárteles brasileños:

*** Cártel de Rondonia:**

El Estado de Rondonia y su capital Porto Velho (cerca de la frontera con Bolivia) sirve para introducir la coca de los cárteles bolivianos, colombianos, peruanos y ecuatorianos, que se procesa en los laboratorios en medio de la selva. Se emplean aviones del tipo Cesna "310" o Embraer "Caruja" para transportar la cocaína o la PBC hasta Guajara- Mirim,

Cacoal y Costa Marques y desde esos aeropuertos -volando a baja altura para no ser detectados por los pocos radares existentes en la zona- siguen rumbo a Corumbá (Mato Grosso do Sul), a Cuiba o a Cáceres (Mato Grosso do Norte). Otras veces hacia el norte de Tabinga (Amazonia) en la frontera tripartita (Perú, Colombia, Brasil), para salir vía Manaus hacia el océano Atlántico y de allí a los centros de consumo.

Es el imperio del denominado *Cártel Brasileiro*, que trajo como consecuencia *“un alto grado de corrupción detectado en sus autoridades y la infiltración de los narcotraficantes en todos los estamentos oficiales”*, según un informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Narcotráfico (C.P.I.N.), Brasilia 1992. De los ocho representantes del Estado de Rondonia en la Cámara Baja, tres (Jabel Rabelo, Mauricio Calixto y Nobel Moura) fueron acusados de *“mantener relaciones con los cárteles colombianos y bolivianos”*.

*** Cártel Comando Vermelho o Cártel Comando Rojo:**

Constituye una federación de bandas que controlan las favelas de Río de Janeiro y monopoliza el comercio minorista de drogas. Se expande en Borel, al norte de dicha ciudad (cerca del barrio residencial de Tijuca) bajo la dirección de Nelson Da Silva. Maneja entre 4.500 y 6.500 narcos fuertemente armados y contaría con 300 bocas de venta de cocaína. En el “Complejo de Alemão”, que aglutina 10 favelas con 250.000 habitantes, la llamada “Nova Brasilia” busca su predominio en el narcotráfico, al mejor estilo de las mafias sicilianas o napolitanas.¹

Varios editores, alarmados por la impunidad y demostraciones de fuerza de los narcotraficantes, alertaron: *“..el narcotráfico desafía a América Latina”*². En un informe titulado “Las villas inundadas de drogas”, se menciona que: *“...las villas miserias argentinas se están favelizando para convertirse en los mayores centros de distribución de drogas del conurbano...donde la gente de diferentes estratos sociales hacen cola...para comprar la droga”*³

*** Cártel de Santa Catarina:**

La ruta BR-101 que recorre todo el litoral atlántico del Estado de Santa Catarina (de noreste a sudeste) ha sido “plantada” desde hace unos años por los narcotraficantes, que instalaron allí sus *negocios turísticos* (internos e internacionales): trata de blancas, juego y drogas. Su zona de influencia se extiende desde Curitiba (Estado de Paraná), recorre San Francisco do Sul, Itajai, Florianópolis, Camboriú, Garopaba, pasando al Estado de Río Grande do Sul. El excedente de la droga no queda en Santa Catarina; se traslada a Passofundo, Bage, Alegrete y llega a Paso de los Libres, Pcia. de Corrientes, Argentina, por donde se distribuye posteriormente.

¹ “Clarín”, 3-11-1994, pag.28.

² “Clarín”, 8-11-1994, pag. 32 y 33.

³ “Diario Popular”, 11-6-95, pag. 12 y 13.

La marihuana tiene otro camino alternativo: de Pedro Juan Caballero (Paraguay), pasando por Ponta Pora y Campo Grande, retorna hacia Curitiba. Durante las temporadas turísticas la población se cuadriplica y también las ganancias. La policía recién aparece cuando es convocada o se descubre un cadáver. Hitoshi Tanabe, integrante de la mafia japonesa *yakuza*, fue detenido en el Estado de Paraná y extraditado a Japón. Estaba acusado de controlar el tráfico de cocaína en Brasil, conectado con la mafia de la droga norteamericana.¹

*** Cártel del Nordeste:**

El Estado de Ceara sobre el océano Atlántico, en las cercanías del Puerto de Fortaleza, reúne tanto la droga procedente del aeropuerto de Brasilia como la que llega vía San Pablo. Sus costas, prácticamente sin control por lo extensas y deshabitadas, constituyen zonas de embarque ideales, tanto para Europa, EEUU o el incipiente mercado africano (Marfil, Ghana, Nigeria).

*** Cártel del Noroeste:**

El pequeño Estado de Acre mantiene 2.048 kilómetros de fronteras con Perú y Bolivia, ocupando el 13% de la frontera “seca” brasileña. En el valle del río Jurua se incrementó el cultivo de coca de la variedad epadu. Más de la mitad de los 35 estados del Brasil se han dedicado -en distinta medida- a su cultivo. La pasta básica de cocaína (PBC), por sus difíciles caminos, sale hacia las refinerías de Colombia. Regresa como clorhidrato de cocaína que emprende viaje hacia Manaus o bien lo hace por la ruta BR 364 con destino a Plácido Castro, Abuna o Guajara-Minim y, desde allí, hacia el océano Atlántico.

Río Branco, capital del Estado de Acre, se convirtió en un importante centro consumidor de crack y lugar de reunión de la guerrilla peruana de “Sendero Luminoso”, como también en “zona franca” para el intercambio de drogas, armamentos y otros artículos de contrabando. Las aduanas, la intervención policial y judicial en los tres Estados que comparten la frontera resultan casi inexistentes. Rige la “ley del narcotráfico”, que no admite el periodismo, la investigación ni la denuncia. La ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero se asemeja a una “sucursal de los carteles colombianos”. Enfrente, en Punta Pora (Brasil), está el supermarket de las armas que proceden de Panamá- Paraguay o Río de Janeiro- San Pablo, de las que se nutren tanto las bandas terroristas como las del narcotráfico.

Brasil con sus dilatadas “fronteras secas” con los países productores de coca, sus 8.511.959 Km. cuadrados de superficie y en especial su topografía, lo han colocado en la vía expansiva de los carteles colombianos, que necesitan los puertos sobre el océano Atlántico (además de Uruguay y Argentina) para la “exportación” a los centros europeos y norteamericanos.

Ello le ha valido ser designado como la futura “super-potencia narco”.

Naturaleza de la amenaza del narcoterrorismo en la Amazonia.

¹ “Clarín”, 24-7-1994, pag. 42.

Las amenazas a los intereses brasileños comprenden, entre otras, las actividades criminales de los narcoguerrilleros y los traficantes de estupefacientes, la introducción ilegal de artículos (armas y explosivos), los asaltos directos contra el medio ambiente y la economía que realizan los mineros, leñadores, pescadores y cazadores ilegales.

El Alto Solimões, lugar que pertenece a la región occidental del estado de Amazonas y que está protegido por un batallón de infantería de selva, mantiene algunos pelotones en puestos avanzados y un puñado de policías federales. Se ha convertido en un lugar especialmente difícil. Esta área representa los desafíos que se encuentran a lo largo de toda la frontera de la Región del Norte de Brasil.

La red de ríos que se extiende hacia el centro de las áreas productoras de estupefacientes, oro y madera de América del Sur, ha atraído a criminales hacia Tabatinga y hacia la región del Alto Solimões. La Secretaría Antidrogas en el Brasil (SENAD) sostiene que el área de Tabatinga es una ruta vital para el narcotráfico en dirección al Atlántico y por lo tanto, se ha concentrado en evitar que los narcotraficantes colombianos infiltren el Amazonas del Brasil.

Tabatinga y otras comunidades fronterizas, en el Brasil amazónico, enfrentan un grave problema causado por los narcoguerrilleros, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC). En toda Colombia, la FARC se compone de 15.000 combatientes armados, los cuales posiblemente están organizados en unos 80 grupos, a los que suele llamárseles "frentes". La FARC fue fundada en 1996, como el brazo militar del Partido Comunista de Colombia, hoy en día es una gran empresa criminal que lucra casi 500 millones de dólares anuales obtenidos del secuestro, la extorsión, el tráfico de estupefacientes y el lavado de dinero.

Las actividades guerrilleras se han extendido hasta el interior del Alto Solimões de Brasil y se repiten a todo lo largo de la frontera colombiana, circunstancia que preocupa a Venezuela, Panamá, Ecuador y Perú. Venezuela ha reforzado sus puestos fronterizos contra las acciones guerrilleras cometidas por la FARC, las unidades paramilitares del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Fuerza Unida de Autodefensa (AUC). Panamá, Perú y el Ecuador también han aumentado su presencia militar y policial en los lugares cuyas fronteras colindan con Colombia.

Por toda Colombia, los frentes de la FARC se han desplazado hacia lugares en donde se conducen actividades de producción de coca, petróleo, campos sembrados de opio, ganadería, plátano y oro. Por ejemplo, los 11 frentes del bloque meridional de la FARC están involucrados en la siembra, procesamiento y mercadeo de la cocaína a lo largo de los ríos San Miguel y Putumayo, que son parte de la frontera meridional de Colombia con Ecuador y Perú. Se tienen informes que el 14° Frente del bloque controla los laboratorios de cocaína en la selva peruana entre los ríos Napo y Putumayo. Estos ríos fluyen directamente al interior de Tabatinga en el Brasil, a través del río Amazonas. Generalmente, los alrededores de Tabatinga y en la región de Alto Solimões, la posibilidad de ganancia obtenida por narcotráfico, lavado de dinero y la exploración ilegal de minas de oro, han atraído a los elementos de la FARC. La amenaza de la FARC para Brasil no es nada nuevo.

En febrero de 1991, una unidad guerrillera de la FARC, compuesta de 40 hombres, atacó a través del río Traíra, desde Colombia hacia el Brasil, matando a tres soldados brasileños e hiriendo a miembros de un destacamento del Ejército Brasileño que se componía de 17 hombres. El destacamento se encontraba en un puesto avanzado en el Traíra, a 400 kilómetros al norte del Cuartel General del Comando de la Frontera del Ejército del Brasil situado en Tabatinga. El ataque de la FARC fue en respuesta a los esfuerzos del Ejército Brasileño de imponer la ley y el orden en una región indígena donde se lleva a cabo la explotación ilegal de las minas de oro. La FARC ha estado extorsionando a los mineros y lanzando incursiones de corta duración contra la compañía local minera.

Las operaciones militares de cooperación entre Brasil y Colombia eliminaron a la unidad de las FARC involucrada en estas incursiones.

En septiembre de 1996, el Comando de la Frontera impuso el estado de alerta a causa de las guerrillas de la FARC en Leticia, Colombia, e informó que unos cuantos guerrilleros habían cruzado la frontera y que se adentraron en Brasil, cerca de Tabatinga. Casi 1000 soldados de CF Sol y del 8º Batallón de Infantería de Selva se desplegaron por todo Tabatinga para proteger las instalaciones militares de la frontera y el aeropuerto. El Comando Sur del Ejército Colombiano tomó medidas similares en la vecina Leticia.

Si bien la operación sólo se prolongó por dos días, sentó un precedente en lo referente al procedimiento para responder a las emergencias. Esta preparación es importante, porque el análisis de la amenaza que prepararon los oficiales de ambos Ejércitos, Brasil y Colombia, revela que la Estrategia de los EE.UU. para la Región Andina, la cual efectivamente puso presión sobre narcotraficantes de las regiones peruanas donde se cultiva la coca, ha empujado la actividad del narcotráfico hasta la cuenca del Amazonas. La Policía Federal cree que una gran organización de narcotráfico ha establecido su centro de operaciones en Leticia y en Tabatinga.

El 1º de noviembre de 1998, el Ejército Brasileño enfrentó a la amenaza narcoguerrillera, cuando cerca de 1.400 combatientes de las FARC atacaron Mitú, capital del Departamento de Vaupes en Colombia, a menos de 10,5 kilómetros de la frontera con Brasil. Mitú sirve de punto de trasbordo de las sustancias químicas esenciales para fabricar la cocaína. El contrabando de químicos se transporta por el río Vaupes desde Brasil hasta las zonas de producción en Colombia.

En un absurdo esfuerzo combinado de coordinación (que más adelante encendió una ola de protestas entre los brasileños), el puesto de avanzada del pelotón de la frontera del Ejército Brasileño en Querari reabasteció de combustible a los aviones y apoyó las operaciones terrestres. Cerca de 500 soldados colombianos contraatacaron desde Brasil para retomar a Mitú el 4 de noviembre. En el combate 150 combatientes colombianos, siete civiles y cinco guerrilleros de la FARC fueron reportados muertos y que la FARC había capturado de 40 a 45 policías. Además del flagelo que causan las actividades de narcotráfico, el Amazonas brasileño afronta una serie mucho más voluminosa de peligros creados por las transnacionales que contribuyen a aumentar el desorden y la anarquía en la frontera.

¿Cuál es el papel del Ejército y cómo funciona para defender los intereses de Brasil en materia de seguridad y desarrollo? El propósito de tener al Ejército en el occidente del Amazonas se remonta a 1637, cuando el capitán portugués Pedro Teixeira exploró a lo largo de la cuenca del Amazonas. Las expediciones de Teixeira dieron luz a la doctrina de *uti possidetis* (soberanía que resultó de la colonización). Para 1776, los nuevos brasileños habían establecido el Fuerte San Francisco Xavier de Tabatinga con el fin de defender la frontera y apoyar a los colonizadores en la región occidental del Amazonas. Salvo unas cuantas interrupciones, los soldados del Brasil han preservado al Fuerte de San Francisco por más de 200 años y persisten en su objetivo, el de proteger la propiedad de la frontera.

La función del Ejército

Los conceptos vigentes en las operaciones de explotar armas y tecnología moderna que permiten contrarrestar las nuevas amenazas, además de los retos que surgen continuamente, reforzarían la estrategia de *uti possidetis* (soberanía que surge a raíz del establecimiento de poblados), estrategia que ha estado en vigencia durante 300 años.

El contrarrestar actividades ilegales no constituye una nueva misión militar, tal como lo reconocen los estudiantes norteamericanos al recordar la respuesta del presidente Jorge Washington a la Rebelión del Whisky en Pennsylvania, en 1794. Más recientemente, y más impresionante también, fue la confrontación de los soldados estadounidenses con los fuertemente armados criminales urbanos durante los disturbios de 1992 en Los Ángeles, donde las pandillas *18th Street*, *Bloods*, *Crips* y otras, fueron los principales antagonistas.

Los eventos alrededor del mundo demuestran que el crimen organizado amenaza, cada vez más, a los gobiernos democráticos y sus instituciones militares. En consecuencia, los lineamientos incluidos en los manuales de campaña deberían contemplar estas nuevas amenazas.

Brasil, defiende la frontera contra las incursiones de las FARC.

Venezuela comparte con Brasil los mismos problemas, vinculados con los acontecimientos en Colombia. Menos preocupado por los refugiados, Brasil se preocupa por el contrabando de armas y drogas y por las incursiones ocasionales de las FARC. Los brasileños tienen motivo para preocuparse con los problemas internos de Colombia. Los insurgentes y narcotraficantes colombianos han sido activos en las regiones fronterizas entre Brasil y Colombia por muchos años. Las amenazas a los intereses brasileños incluyen el contrabando, que se extiende desde las armas a los animales exóticos; atentados directos contra el medio ambiente y la economía por la explotación forestal, la minería del oro, la pesca y la caza ilegal y actividades llevadas a cabo por los insurgentes y los narcotraficantes. Estas amenazas han preocupado al gobierno brasileño por más de una década, lo que se evidencia en el alto número de acontecimientos al respecto.

En 1991, una unidad de 40 hombres de las FARC atacó a un destacamento de operaciones selváticas del Ejército, dentro del territorio brasileño por el río Traíra, matando a tres soldados e hiriendo a otros nueve. El ataque fue rechazado cuando Fuerzas Especiales brasileñas contraatacaron en territorio colombiano, matando a siete guerrilleros

y recuperando armas y municiones. En setiembre de 1996, unidades del Ejército del Comando de Frontera en Tabatinga entró en estado de alerta general después de recibir información de que elementos de las FARC habían cruzado la frontera con Brasil, cerca de la ciudad antes mencionada, a unos 400 kilómetros al sur del área donde tuvo lugar el incidente del río Traíra. Aproximadamente 1.000 soldados brasileños se desplegaron por toda la región de Tabatinga para vigilar posiciones fronterizas, instalaciones militares y el aeropuerto.

Nuevamente en 1999, la inteligencia brasileña obtuvo información de que la pista de aterrizaje del Ejército en Querari era un objetivo de las FARC. Se pensaba que las FARC pretendían negar el acceso de las Fuerzas Armadas de Colombia a la pista durante un siguiente ataque contra Mitú. En una maniobra preventiva contra las FARC, a fines de octubre, una unidad de 249 hombres de las Fuerzas Especiales brasileñas encabezó una ofensiva mayor para asegurar la pista en Querari y para reforzar el área de Cabeza de Perro con 5.000 hombres del Comando Militar de Amazonas. Las tropas se desplegaron a lo largo de la frontera entre São Joaquim y Vila Bittencourt en un frente de 600 kilómetros para disuadir de cualquier ataque.

El empleo del narcotráfico por la guerrilla, para sostener la insurgencia colombiana, refuerza la amenaza a Brasil. Sus extensas áreas selváticas en el estado de Amazonas, surcadas con el sistema fluvial más grande del mundo y ubicadas adyacentes a otros países productores de drogas, han convertido a Brasil en un importante país de tránsito para las drogas destinadas a los Estados Unidos y Europa. Desde el territorio brasileño viene el importante suministro de productos químicos necesarios para la producción cocatera. El sistema fluvial es idóneo para el movimiento de grandes cantidades de kerosene, ácido sulfúrico, potasio permanganato y acetona necesarios en el procesamiento de los cristales de clorhidrato de cocaína. La Zona de Libre Comercio en Manaus, facilita el negocio de sustancias químicas debido a la presencia de 256 empresas de importación de aquéllas, empleadas en el procesamiento de la droga. Los productos químicos legalmente importados están re-etiquetados para su entrega a laboratorios ilícitos en Colombia, Ecuador y Perú.

Una investigación realizada en el año 2000 por la Comisión Parlamentaria de Investigación Brasileña (CPI) reveló que los grandes grupos de narcotraficantes brasileños venden armas a las FARC, a través del área fronteriza, empleando las vías fluviales. La Policía Nacional de Colombia ha reportado la interceptación de "artículos importados" tales como las *AK-47*, *HK91* (versión semiautomática de la *G3*), *AR-15*, armas para francotiradores *Dragunov*, armas *Galil*, ametralladoras de calibre .50, lanzagranadas de 40 milímetros y granadas *C-90*, aunque no necesariamente todas de Brasil. Existen informes no oficiales de que las FARC han obtenido misiles portátiles de superficie - aire, tales como los *SA-14* y *SA-16* desde Rusia y los *Redeye* y *Stinger* (de fabricación norteamericana) de Siria, agregándolos a su inventario de armas. También, los miembros de la CPI detallaron la participación de 827 oficiales brasileños, entre ellos legisladores, magistrados, ministros, financistas y policías, que están involucrados en los negocios de armas y drogas en Brasil.

Este preocupante comercio de la narcoguerrilla a lo largo de la frontera brasileña con Colombia causó, bajo la Operación *Cobra*, el fortalecimiento del área fronteriza. La

pequeña fuerza de policía federal del Amazonas, de 20 hombres ha sido expandida hasta 180 oficiales y su equipo incluye 18 lanchas patrulleras, dos aviones y un helicóptero. Ahora existen siete bases de la policía federal a lo largo de la frontera para detectar el contrabando que se filtra por los ríos y caminos en sus respectivas áreas de responsabilidad.

La mayor presencia del Gobierno en la región fronteriza brasileña se ha desarrollado lentamente. Sus raíces datan de la fundación del Fuerte San Francisco en Tabatinga en 1776 y, más recientemente, del Proyecto *Calha Norte*, de 1985, diseñado para mejorar la seguridad y desarrollo a lo largo de la frontera selvática. Hoy en día, Brasil mantiene a unos 22.000 soldados guarnecidos cerca de la frontera y cualquier concentración adicional será "para defender y salvaguardar nuestra frontera contra la agresión narcoterrorista".

El actual adelantamiento de tropas coincide con el muy esperado despliegue del Sistema para la Vigilancia del Amazonas (SIVAM). El SIVAM, que costó US\$1.400 millones, es un sistema integrado por 10 radares grandes (domos con radares adentro), 100 estaciones de investigación meteorológica, aviones de observación, estaciones de captación de comunicaciones e imágenes digitalizadas de satélite, todos apoyados por una red satelital de las comunicaciones de radio y teléfono. Este año, los EE.UU. están suministrando US\$3,5 millones a Brasil para el proyecto SIVAM, así como algunas lanchas pequeñas para operaciones fluviales contra el narcotráfico.

El concepto del SIVAM es proteger la región, aun con malas condiciones meteorológicas, fuegos forestales y actividades criminales, así como controlar el espacio aéreo de la región amazónica. Los requerimientos de seguridad para el SIVAM, incluyen monitoreo del narcotráfico, contrabando de minerales y maderas nobles, líneas divisorias, reservas indígenas, fronteras nacionales, fuegos forestales y navegación fluvial. El SIVAM es la infraestructura para el más amplio concepto del Sistema para la Protección del Amazonas (SIPAM), una iniciativa interagencial brasileña.

Hace varios años, los oficiales brasileños en Manaus y Tabatinga creían que la ola de crimen transnacional, el terrorismo de la guerrilla y el bandolerismo en la frontera, eran resultados de las operaciones de interdicción exitosas en Bolivia y Perú. A pesar de las tendencias históricas que demuestran estas actividades como asuntos de seguridad que han existido por muchos años, el Plan Colombia ahora es reconocido como otro factor que afecta los crecientes problemas fronterizos de Brasil. La actitud fuerte de Brasil en contra de la narcoguerrilla, se parece a la posición de Perú contra la guerrilla. Después de aniquilar dos distintas amenazas de guerrilla, Perú actualmente atiende a su frontera septentrional con Colombia.

Perú ataca el problema.

La mayor parte de la frontera de 1.000 millas entre Colombia y Perú, se extiende de este a oeste a través de un área de densa selva a lo largo del Río Putumayo, con el departamento colombiano de Amazonas al norte y el Departamento peruano de Loreto, al sur. Una saliente colombiana en el extremo oriental de la frontera gira repentinamente hacia el sur, alcanzando a la ciudad de Leticia, que enfrenta a la ciudad brasileña de Tabatinga. La capital de Loreto, Iquitos, está a 90 kilómetros al sur de la frontera. Sólo ha interesado

históricamente a los indios y exploradores de petróleo la ancha faja de selva entre el Río Putumayo y el Río Napo en Perú, pero en los últimos años han surgido informes que indican que las FARC han estado operando campamentos de producción cocalera en el área. Esta región es tan remota, que en comparación con otras regiones fronterizas no afecta en forma significativa a las operaciones militares de las FARC, el contrabando de armas o el narcotráfico. No hay suficiente población para sostener a la guerrilla o para presentar un problema notable de refugiados, en caso que estallen hostilidades.

De hecho, tal vez sea correcto decir que no ha habido ningún efecto colateral a lo largo de la frontera, esto es, si se ignora la indiscutida presencia de las FARC. Sin embargo, el conflicto colombiano engendró un incidente involucrando contrabando de armas de las FARC, que fue suficientemente serio para hacer caer el Gobierno del presidente peruano Alberto Fujimori en el año 2000. El jefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Perú, Vladimiro Montesinos Torres, estaba implicado en una operación internacional de contrabando de armas que aparentemente entregó 10.000 fusiles de asalto a las FARC. La furia resultante y maniobras políticas, dejaron a Montesinos y a Fujimori fuera del poder y fuera del país.

En este evento de tráfico de armas, fusiles de la antigua República Democrática Alemana pasaron por Jordania y fueron entregados directamente a las FARC en Colombia, por un avión *IL-76* de fabricación rusa, piloteado por rusos y ucranios. Después de un fallido primer vuelo en marzo de 1998, el segundo salió de Amman, Jordania, el 23 de marzo de 1999. Más de 2.500 fusiles fueron lanzados desde el aire en embalajes de madera cerca de Barrancomina, a lo largo del río Guaviare, a unas 250 millas al este de la "zona de despeje" de las FARC.

El Frente 16 de las FARC coordinó la operación de contrabando de armas, las recibió, estableció escondites y las distribuyó. En abril, el Ejército colombiano realizó una operación contra los insurgentes, en el que murió el comandante del Frente 16, Esteban González y fueron capturados cuatro venezolanos. Poco después, el Ejército colombiano capturó más de 100 fusiles y los números de serie revelaron el origen de las armas.

Tres vuelos más se realizaron, hasta agosto de 1999, siguiendo un itinerario de vuelo desde Amman, a través de Mauritania y Trinidad-Tobago, hasta Iquitos, Perú. En cada vuelo lanzaron 2.500 fusiles para las FARC. Eventualmente, agentes de la policía antidrogas de Perú retuvieron el avión. Según se informó, entidades dentro de Jordania iban a proveer 40.000 nuevos fusiles, cuando el trato bruscamente se terminó.

Se puede anticipar que los peruanos son capaces de rechazar cualquier incursión por parte de la guerrilla colombiana, pero la limitada actividad de guerrilla que sí enfrenta Perú, se encuentra en el centro y en la parte sur del país, no en la frontera con Colombia. Las organizaciones insurgentes de Perú, Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), han sido estratégicamente derrotados, quedando pequeños vestigios que ahora tratan de continuar las operaciones. De vez en cuando, con el fin de reclutar más gente SL interrumpe el movimiento libre de personas, estableciendo barricadas en los caminos de la parte norte del Valle Huallaga.

Las autoridades policiales, militares y del servicio de inteligencia, han sido eficaces atacando a estos grupos y llevando a los jefes ante la justicia. El último grupo de líderes claves del SL fue arrestado en 1999, pero ocasionalmente llegan informes de enfrentamientos en el interior, en que grupos del SL atacan instalaciones del Gobierno. El MRTA ha estado inactivo desde su derrota en la residencia del Embajador del Japón en la ciudad de Lima en 1997. El sistema judicial del Perú brega duramente con los terroristas y narcotraficantes.

La estrategia antidrogas del Perú de desarrollo alternativo y erradicación, parece estar en el camino correcto. Redujo el cultivo de coca en un 66 %, durante los últimos cuatro años. Los peruanos continuarán sus esfuerzos antidrogas sin interferencia de los acontecimientos asociados con el conflicto colombiano y enfatizarán el fortalecimiento de la interdicción fluvial y aérea y reforzarán el desarrollo alternativo, debido al aumento de los precios de coca. Los laboratorios de cocaína están ubicados generalmente en lejanas zonas orientales de Perú, donde los aviones pueden salir antes de que pueda reaccionar la Fuerza Aérea. Colombia ya no desempeña un mayor papel en el transporte de la droga desde Perú. La mayoría de las rutas peruanas mueven la droga por vías fluviales y rutas aéreas, a través de Brasil, por tierra a través de Ecuador y por mar vía el puerto de Callao, cerca de Lima.

Atacando el Centro de Gravedad

El narcotráfico, el contrabando de armas y otras actividades de bandolerismo, han afectado todas las áreas fronterizas por muchos años. Las fuerzas opositoras en Colombia se mueven sin restricción a Venezuela, Ecuador y Panamá, pero en Brasil, las FARC han pagado mucho en sus incursiones. Los vecinos de Colombia sugieren que la campaña antidrogas en Putumayo alentará a los refugiados, cultivadores de coca y a los combatientes a comenzar el movimiento a través de las fronteras con otros países, especialmente con Ecuador y Brasil

Existe alguna justificación para los temores de los líderes regionales sobre Colombia y la asistencia de los EE.UU. que recibe. El conflicto actual, ahora propulsado por la droga, viene librándose por más de 30 años en forma intermitente. Las FARC se han convertido en una gran empresa de drogas, con pocos incentivos para terminar la guerra. Cualquiera fuere el razonamiento político que llevó al Presidente Pastrana, éste resultó en la cesión de un territorio tan enorme a las FARC que su consecuencia militar es desalentadora. La zona de las FARC, “el despeje”, es una gran base para las operaciones militares, el reclutamiento, el cultivo de la droga y el contrabando de armas, así como el propósito declarado: terreno seguro para efectuar discusiones con el Gobierno. Con cada semana que pasa, el santuario que ofrece el despeje hace cada vez menos probable que el Ejército colombiano sea capaz de concentrar el tipo de correlación de fuerzas necesaria para derrotar la guerrilla.

La experiencia peruana con el SL y el MRTA, provee una valiosa perspicacia en la eficaz toma de decisiones con respecto al centro de gravedad y en tener la voluntad de atacarlo. Como fue declarado en la Evaluación Estratégica de 1999 (*Strategic Assessment 1999*) de la Universidad Nacional de Defensa de EEUU, "Una vez derrotados los insurgentes, el estado [de Perú] era capaz de montar una campaña nacional más eficaz

contra las organizaciones narcotraficantes y la asistencia de los EE.UU. tuvo impacto más sustancial". El Gobierno de Colombia enfatiza las operaciones antidrogas en una etapa de la insurgencia en la que las FARC parecen estar listas para entablar las operaciones militares convencionales. El Ejército se encuentra en una batalla de tres frentes: con la guerrilla, los paramilitares y los narcotraficantes. Como observó el especialista de seguridad Michael Radu, "los problemas principales en Colombia son las FARC y el ELN, y . . . no existe ninguna solución para el problema de drogas, mientras que los insurgentes operan a su voluntad".

Las FARC y el ELN han podido establecer un bajo nivel de apoyo rural, a punta de pistola, pero el Ejército Colombiano y la Policía Nacional son las instituciones más respetadas de Colombia, tras la Iglesia Católica. Si el Ejército puede mantener la disciplina relacionada a los derechos humanos y gana el apoyo total del liderazgo civil, puede ser plenamente capaz de atacar el centro de gravedad.

Los vecinos de Colombia desempeñarán importantes papeles a través de la provisión de apoyo internacional para frenar las actividades de las FARC, el ELN y los paramilitares. No se requiere que sus tropas desplieguen lado a lado con los soldados colombianos, pero sí son necesarias, en número suficiente, a lo largo de las fronteras con Colombia. Brasil ha sido particularmente eficaz en la negación del empleo de territorio brasileño como santuario de las FARC, para las operaciones militares contra Colombia. Con el compromiso internacional y el liderazgo decisivo en el país, Colombia tiene buena oportunidad de eliminar los peligros que causan las consecuencias en los países limítrofes.

El Ministro de Seguridad Nacional de Brasil, el general Alberto Cardoso, provee un punto de vista de las iniciativas de seguridad de Colombia. *"Si existe un aspecto positivo de la salida de estos problemas con el Plan Colombia, es que toda la sociedad se ha dado cuenta de la necesidad de defender el Amazonas"*. Pero las acciones y los comentarios de Brasil, vienen de una posición de poder e invulnerabilidad relativa; los otros vecinos de Colombia son menos seguros y parecen percibir el tono moral desmadejado en el sector político de Colombia.

Las Fuerzas Armadas de Colombia - tan apolíticas que cualesquier otras en Latinoamérica - pueden tener la oportunidad de comprobar esta tradición en los meses que vienen. Las tentaciones análogas no siempre han sido resistidas en la región.

Los potenciales imperativos incluyen una guerrilla izquierdista en el umbral del éxito estratégico, la cesión de territorio soberano, una economía vacilante y el pueblo colombiano que quiere una posición más dura en contra de las varias organizaciones criminales.

El Artículo 217 de la Constitución Política de Colombia afirma, "Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional". Es posible que el Artículo 217 les pesará a más y más los oficiales colombianos, mientras que las partes de la Constitución diseñadas para mantener las Fuerzas Militares de Colombia bajo el control de políticos civiles, empiecen a perder su efectividad. Cualquier paso decisivo por parte de las Fuerzas

Militares de Colombia, en la eventualidad de arrogarse el poder político, probablemente debilitaría las perspectivas de coordinación regional para la seguridad. Por otra parte, si el Gobierno de Colombia endurece su posición contra la narcoguerrilla, entonces las correlaciones combativas dentro de Colombia pueden cambiar en forma dramática a favor del Ejército de Colombia, disipando la desafección militar y facilitando desarrollar el apoyo verdadero para un plan combinado contra los criminales.

PARAGUAY

Paraguay es el país principal de tránsito de drogas, para cantidades significativas de cocaína, en su mayor parte boliviana y es también un centro importante de lavado de dinero en América Latina (aunque sigue siendo incierta la porción de dinero lavado que puede atribuirse al tráfico de drogas).

Expertos del gobierno de Estados Unidos estiman que anualmente pueden pasar por Paraguay entre 15 y 30 toneladas métricas de cocaína dirigidas a Argentina, Brasil, Estados Unidos y Europa. De esta cantidad estimada, en 1999 sólo se decomisaron 95 kilogramos de cocaína; más aún, sólo se efectuaron 211 arrestos de traficantes de bajo nivel de marihuana y cocaína, en su mayoría antes de abril de 1999. Paraguay es un país productor de marihuana de alta calidad. Aunque ninguna parte de ella entra en Estados Unidos, el gobierno de Paraguay decomisó cantidades sin precedentes de marihuana y erradicó 900 de las que se estima son 2.500 hectáreas de campos de marihuana.

En julio de 1999 se aprobó un nuevo código penal, que declara *delito* el participar en complots. Esto permitirá encausar a los que se benefician de la actividad criminal pero no son los perpetradores materiales del *crimen*. Sin embargo, se requerirá un extenso adiestramiento de fiscales y jueces antes que esta nueva ley pueda aplicarse en plenitud.

El gobierno de Paraguay no alcanzó la mayoría de las metas antidrogas de 1999, de una manera que sea suficiente para la certificación plena. Desde 1995, ha estado pendiente una legislación para darles a policías y fiscales herramientas legales modernas, tales como usar informantes, controlar las entregas y realizar investigaciones secretas. La administración González Macchi sometió al Congreso paraguayo otro proyecto de la ley, pero es la tercera administración que hace lo mismo, sin que se apruebe la legislación. El gobierno de Paraguay no investigó, arrestó ni enjuició a ningún traficante de drogas importante, ni tomó medidas suficientes para impedir o castigar la corrupción pública en general, o específicamente respecto del tráfico de drogas. El gobierno de Paraguay no aplicó la ley contra el lavado de dinero de 1996, mediante el arresto o encauzamiento de los violadores. Más aún, el gobierno de Paraguay no proveyó financiamiento operativo o recursos adecuados al secretariado contra el lavado de dinero, SEPRELAD, para permitirle funcionar como organización independiente (aunque en diciembre de 1999 se aprobó un presupuesto para 2000). El gobierno de Paraguay tampoco mostró progreso en dirección del desarrollo de una capacidad investigativa y operativa contra las drogas y el **crimen organizado** en las regiones fronterizas.

Los acontecimientos de 1999 - que incluyeron el desafío del entonces presidente Cubas al Tribunal Supremo, el asesinato del vicepresidente Argaña, la muerte de manifestantes

estudiantiles, el juicio político a Cubas y su renuncia, la sequía, el desasosiego rural y lo que se informó fue la presencia del ex general fugitivo y organizador de golpes de estado Lino Oviedo - demuestran los muchos retos que encara la democracia paraguaya. Estos también contribuyeron al desempeño insatisfactorio del gobierno del Paraguay en materia de drogas.

De la protección y la Defensa

Bajo circunstancias normales, la represión del narcotráfico es una tarea que corresponde única y exclusivamente a las autoridades civiles, responsables de imponer la ley, pero, *¿deberíamos aceptar las circunstancias actuales como normales?* El profundo daño causado por el narcotráfico en Colombia y en México, es evidencia de la naturaleza devastadora de esta amenaza. Ya es hora de reconocer la magnitud de los problemas creados por el tráfico de narcóticos en nuestro territorio y ya es hora de controlar esta situación. Los autores están al tanto que la respuesta definitiva al problema de los estupefacientes, consiste en reducir la demanda. Sin embargo, a no ser que se lleve a cabo una campaña para lograr tal fin, que esté organizada y a la que se le dé mucha publicidad, queda poca esperanza de que este abuso se reduzca a un mínimo y que la violencia causada por el consumo de narcóticos alcance un grado tolerable para la sociedad latinoamericana.

Ante el alto grado de vulnerabilidad y de disfuncionalidad en que se encuentran los sistemas de Defensa de los países miembros del **MERCOSUR**, considerando las particularidades descritas, es indispensable encontrar un camino hacia un sistema de Seguridad Estratégica Regional, que preserve un futuro político en Paz, frente a los actuales, nuevos y poderosos riesgos y amenazas internacionales en presencia. Salvaguardar al Estado, como instrumento de Seguridad, Justicia y Equidad Social, es el desafío estratégico primordial en la posguerra fría.

Esta exigencia conduce indefectiblemente al **MERCOSUR POLÍTICO** y éste tendrá entidad cuando se logre una Política de Defensa Común, a través de un Acuerdo de Seguridad Colectivo. La naturaleza de los principales hechos y amenazas estratégicas del continente, el narcotráfico y el terrorismo, operando sobre sociedades empobrecidas y Estados Nacionales débiles, con sus instituciones malversadas y sus sistemas políticos no consolidados, no ha encontrado una respuesta combinada y unificada, que tenga en cuenta las características internacionalizadas y flexibles de una agresión estratégica diluida, no militar. Allí encontramos el verdadero desafío que debemos afrontar.

BIBLIOGRAFIA

* ESCOBAR, Raúl Tomás. "El crimen de la droga", Editorial Universidad 1992-1999.

- * ESCOBAR, Raúl Tomás. "Drogas y efectos", Editorial Policial, 1998.
- * EHRENFELD, Rachel. "Narcoterrorismo", Editorial Atlántida, 1990.-
- * QUADRO, César y BOTTO, Roger. "El Conflicto Narcotráfico", Editorial Depalma 1992.-
- * COLIN M. Mac LACHLAN, "EL narcotráfico". Instituto de Investigaciones Culturales Latinoamericanas", 1995.
- * KOUTOUDJIAN Adolfo, AUDEL Heriberto, FRAGA Jorge, QUELLET Ricardo, "Geopolítica Tridimensional Argentina. Reflexiones para el siglo XXI", Editorial Eudeba, Bs. As. 1999.
- * D. W. SHIN, "La Guerra del Futuro: Vuelta a lo Básico". Rev. Ec CEM. EE.UU. 2000.
- * H. J. AUDEL. "El Narcoterrorismo Como Máximo Potencial Corruptor en las Américas". En "Informe de la Comisión para la Recuperación de la Ética en la Sociedad y en el Estado". Ed. del Congreso Nacional. 1991.
- * E. LUTTWAK, "Toward Post Heroic Warfare". Foreign Affairs. May/June 95.
- * M. DE BERLINER, "La Emergente Súperpotencia de las Drogas". Revista de Occidente 2/13- México. 1996.
- * GRIFFITH, "From Cold War Geopolitics to Post War Geonarcotics". International Journal. Vol. 49-Nº1. Canadá. W. 1996.
- * J. NYE Jr. "Conflicts After Cold War". Washington Quarterly. W. 1996.
- * H. J. AUDEL, "El Océano Político". Rev. Geopolítica Nro. 71. Sep-Oct-Nov 2000.

Organismos, publicaciones y medios de prensa consultados a través de Internet

- Secretaría de Estado de EEUU : www.usinfo.state.gov
- Command and General Staff College EEUU: www.cgsc.army.mil
- Página Oficial de las FARC: www.farc-ep.org
- Universidad Nacional de la Defensa EEUU: www.ndu.edu
- Academia Argentina de Asuntos Internacionales: www.aaai.org.ar
- National Institute of Drug Abuse EEUU: www.nida.nih.gov
- Office of National Drug Control Policy: www.whitehousedrugpolicy.gov

- Dirección Nacional de Estupefacientes, Colombia: www.dnecolombia.gov.co
 - Policía Nacional de Colombia: www.policia.gov.co
 - Observatorio Geopolítico de las Drogas: www.ogd.org
 - Periódico El Colombiano: www.elcolombiano.terra.com.co
 - Diario La Nación: www.lanacion.com.ar
 - Diario Clarín: www.clarin.com.ar
-